



**CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA**

**Bruselas, 22 de julio de 2009 (11.08)
(OR. de, en)**

11971/09

DROIPEN 61

NOTA DE TRANSMISIÓN

Remitente:	Sr. D. Nikolaus Obrovski, Consejero JAI, Representación Permanente de Austria ante la Unión Europea
Destinatario:	Sr. D. Ivan Bizjak, Director General, DGH, Justicia y Asuntos de Interior, Secretaría General del Consejo
Asunto:	Decisión marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito - Carta de notificación

Adjunto se remite a las Delegaciones una carta de notificación de Austria.

Representación Permanente de Austria
ante la Unión Europea

B-1040 Bruselas, 30, avenue de Cortenberg

Teléfono: +32 2 2345-100 (central)

Fax: +32 2 2356-100

Correo electrónico: bruessel-ov@bmeia.gv.at

Persona de contacto: Mag. Nikolaus OBROVSKI

Teléfono directo: +32 2 2345-269

Fax directo: +32 2 2356-308

Correo electrónico: nikolaus.obrovski@bmeia.gv.at

Bruselas, 26 de junio de 2009

A la atención del
Sr. D. Jonathan Faull, Director General
Comisión Europea
DG Justicia, Libertad y Seguridad
Rue de Luxembourg, 46
1049 Bruselas

GZ 3.3.20/18/09

Asunto: Decisión marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito;
Notificación

Estimado Sr. Director General:

La Representación Permanente de Austria le remite adjunto un resumen de las disposiciones de aplicación así como las disposiciones legales pertinentes mediante las cuales se han incorporado en el derecho nacional las obligaciones derivadas de la Decisión marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito.

Le saluda atentamente
Por la Representación Permanente:
(Firma)
Mag. Nikolaus Obrovski
(Agregado/Justicia y Asuntos de Interior)

El presente escrito se remite también al Sr. D. Ivan Bizjak, Director General, así como, por correo electrónico, al Sr. D. Sebastiano Tiné, Jefe de Sección.

Resumen de las disposiciones de aplicación

Decisión marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito

En virtud del artículo 6, apartado 2, de la Decisión marco del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (DO L 68 de 15.3.2005, p. 51), los Estados miembros deben transmitir a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones mediante las cuales incorporen a sus legislaciones nacionales las obligaciones derivadas de dicha Decisión marco.

Respondiendo a este deber, la República de Austria notifica que las obligaciones derivadas de dicho acto jurídico encuentran cumplimiento en las disposiciones del derecho austriaco que se indican a continuación:

Sobre el artículo 2 - Decomiso:

El contenido de este artículo corresponde a lo dispuesto en el artículo 1, letra a), de la Decisión marco del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa al blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (en conjunción con el artículo 2 del Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito).

Dicha disposición encuentra su cumplimiento en el derecho austriaco en los artículos 20, 20b y 26 del Código Penal (CP), así como en los artículos 110 a 115 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LEC) en la versión que figura en el Boletín Oficial I 2004/19 (artículos 143 y 144a, en la antigua versión de la LEC), así como en los artículos 443 a 446 de la LEC y 64 a 67 de la Ley de extradición y asistencia judicial (LEAJ). Según el derecho austriaco, el decomiso no se limita a actos ocasionales de determinada gravedad, de modo que el supuesto del artículo 2 puede considerarse como satisfecho.

Sobre el artículo 3 - Potestad de decomiso ampliada

La obligación derivada del artículo 3 encuentra cumplimiento en el derecho penal austriaco en los artículos 20 y 20b del CP. Ello se debe, en particular, a que el artículo 20 del CP no se centra en la comisión de determinados delitos, sino que hace posible el embargo de los beneficios, siempre que se hayan obtenido beneficios para un acto delictivo o mediante dicho acto. Por ello, no constituye un requisito previo la existencia de una sentencia condenatoria en virtud de dicha acción.

Además, en el artículo 20, apartado 3, del CP se prevé un endurecimiento del embargo para aquellos autores que hayan obtenido beneficios durante el tiempo en que hayan formado parte de una organización delictiva o una asociación terrorista, beneficios que se supone se derivan de actos delictivos y cuyo origen legítimo no pueda acreditar el autor.

Por ello, en caso de sentencia condenatoria, es posible en cualquier caso un embargo de los beneficios, de modo que encuentran cumplimiento las obligaciones impuestas en virtud del artículo 3, apartado 2, letras a) y b), de la Decisión marco, según el cual podrá procederse al decomiso al menos en aquellos casos en que "un órgano jurisdiccional nacional, basándose en hechos concretos, está plenamente convencido de que los bienes de que se trata provienen de actividades delictivas desarrolladas por la persona condenada durante un período anterior a la condena por la infracción a que se refiere el apartado 1...".

La "plena convicción", requerida en el artículo 3, apartado 2, de que los bienes provienen de actividades delictivas, es, según el derecho austriaco, en cualquier caso necesaria para el embargo de los beneficios, y ello también queda plasmado en particular en el artículo 20, apartado 2, del CP.

La condición formulada en el artículo 3, apartado 2, letra c) encuentra cumplimiento en el artículo 20, apartado 2, del CP.

Por lo que se refiere a la disposición sobre la posibilidad recogida en el artículo 3, apartado 3, ha de señalarse que, con arreglo al artículo 20, apartado 4, del CP, el embargo de los beneficios no sólo puede afectar al autor del acto delictivo, sino también a cualquier persona que haya obtenido del autor bienes destinados a la comisión del acto delictivo u obtenidos mediante la misma y que con ello haya obtenido beneficios ilegítimos. Ello tiene también validez cuando la tercera persona es una persona jurídica.

Sobre el artículo 4 - Vías de recurso

Las vías de recurso relativas a las disposiciones patrimoniales de un órgano jurisdiccional están reguladas para todos los participantes en los artículos 443 a 445a de la LEC. La resolución sobre las disposiciones patrimoniales puede ser impugnada, excepto en caso de ejecución de un procedimiento simplificado de toma de decisiones con arreglo al artículo 445a del CP, en favor y en contra del condenado o de la persona que participe en la responsabilidad.

En el anexo se recoge el texto de las disposiciones antes mencionadas.

Ley federal de 23 de enero de 1974 sobre los actos que son objeto de una sanción judicial (Código Penal – CP)

Artículo 20 del CP - Embargo de los beneficios

1) Toda persona que

1. haya cometido una infracción penal mediante la cual haya obtenido bienes, o
2. haya recibido bienes para la comisión de una infracción penal, será condenada a pagar una multa cuyo importe será el de los beneficios ilegales que haya obtenido. En la medida en que los beneficios no puedan ser determinados o sólo puedan serlo mediante un esfuerzo desproporcionado, el órgano jurisdiccional determinará según su estimación el importe que deba embargarse.

2) Cuando

1. el autor haya cometido delitos de forma continua o periódica (artículo 17) y haya recibido bienes derivados de su comisión o destinados a la misma, y

2. haya recibido en el momento de cometerse dichos delitos otros bienes, acerca de los cuales cabe suponer que proceden de la comisión de otros delitos del mismo tipo, y cuyo origen legítimo no pueda acreditarse, dichos bienes se tendrán en cuenta a la hora de fijar el importe que deberá embargarse.

3) Será condenado a pagar una multa, cuyo importe, equivalente a los beneficios obtenidos, fijará el órgano jurisdiccional según su propia estimación, el autor que haya obtenido bienes en el mismo periodo en que haya formado parte de una organización delictiva (artículo 278a) o una asociación terrorista (artículo 278b), de los cuales cabe suponer que proceden de acciones delictivas, y cuyo origen legal no pueda acreditarse.

4) Toda persona que, de manera inmediata e ilegal, haya obtenido beneficios mediante una infracción penal cometida por otra persona o a partir de los bienes empleados para su comisión, será condenada a pagar una multa cuyo importe corresponderá al de dichos beneficios. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica o una sociedad personalista, deberá asimismo ser condenado a realizar dicho pago.

5) En caso de fallecimiento de la persona que se haya beneficiado de forma inmediata o en ausencia de una persona jurídica o de una sociedad personalista que se hubieran beneficiado asimismo de forma inmediata, el embargo de los beneficios afectará a su sucesor legal, siempre que dichos beneficios existieran aún en el momento de la transmisión de derechos.

6) Cuando existan varios beneficiarios, la condena les afectará en función de su grado de participación en los beneficios. Cuando no pueda determinarse dicha participación, ésta será fijada por el órgano jurisdiccional según su propia estimación.

Artículo 20b del CP - Incautación

1) Los bienes que se encuentren en poder de una organización delictiva (artículo 278a) o una asociación terrorista (artículo 278b) o se hayan facilitado o recogido como medio de financiar el terrorismo (artículo 278f), serán objeto de incautación.

2) Los bienes procedentes de una infracción penal serán objeto de incautación cuando la acción de la cual procedan sea también punible en virtud de la legislación del lugar en que se haya cometido la infracción pero no esté sujeta a lo dispuesto en los artículos 62 a 65 del Código Penal austriaco.

Artículo 26 del CP - Decomiso

- 1) Se incautarán los objetos que el autor haya utilizado para cometer una infracción penal, que él mismo haya decidido utilizar en la comisión de dicha infracción o que se hayan producido mediante la misma, cuando ello parezca indicado según la índole particular de los objetos de que se trate, a fin de contrarrestar la infracción penal en cuestión.
- 2) Se prescindirá de la incautación cuando el interesado haya anulado la índole particular de los objetos, especialmente cuando haya eliminado o inutilizado los dispositivos o las características que faciliten la comisión de una infracción penal. Los objetos a los que tenga derecho una persona que no hay participado en la infracción sólo podrán incautarse cuando la persona de que se trate no aporte ninguna garantía de que dichos objetos no han sido utilizados para cometer la infracción penal en cuestión.
- 3) En caso de darse los requisitos para efectuar el decomiso, los objetos también podrán incluirse en el mismo cuando ninguna persona determinada pueda ser perseguida o condenada en razón de la infracción penal de que se trate.

Ley de enjuiciamiento criminal de 1975 - LEC (Boletín Oficial 1975/631, en la versión que figura en el Boletín Oficial I 2007/109)

Artículo 100 de la LEC - Confiscación

- 1) Se autorizará la confiscación cuando ésta parezca necesaria
 1. por motivos de prueba
 2. para garantizar las reclamaciones de derecho privado (artículo 367), o
 3. para garantizar el embargo de beneficios (artículo 20 del CP), la incautación (artículo 20b del CP), el decomiso (artículo 26 del CP) u otra disposición de carácter patrimonial prevista por la ley.
- 2) La confiscación será ordenada por el ministerio fiscal y ejecutada por la policía judicial.
- 3) La policía judicial estará autorizada a confiscar objetos (artículo 109, punto 1, letra a) por iniciativa propia
 1. cuando:
 - a. no estén en poder de nadie,
 - b. hayan sido sustraídos a la víctima mediante infracción penal,
 - c. hayan sido hallados en el lugar de los hechos y utilizados para cometer la infracción penal o hayan podido ser destinados a dicho fin, o
 - d. sean de poco valor o puedan sustituirse provisionalmente sin dificultad.
 2. cuando su posesión esté prohibida de forma general (artículo 445a, apartado 1),
 3. cuando una persona que haya sido detenida en virtud del artículo 170, apartado 1, punto 1, haya sido descubierta en posesión de dichos bienes, o estos hayan sido hallados al ser registrada dicha persona en virtud del artículo 120, apartado 1, o
 4. en los casos previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (Diario Oficial L 196 de 2.8.2003, pp. 7-14).
- 4) La confiscación de objetos por motivos de prueba (apartado 1, punto 1) no estará autorizada, y en cualquier caso se suprimirá a petición de la persona afectada, siempre que el fin de la prueba pueda lograrse mediante grabaciones de imágenes o sonidos o de otro tipo, o mediante copias de notas escritas o datos sometidos a un tratamiento automático, y no pueda suponerse que los propios

objetos confiscados o los originales de las informaciones confiscadas sean examinados en la vista de la causa.

Artículo 111. 1) Toda persona que esté en posesión de objetos o bienes que hayan de ser confiscados, estará obligada (artículo 93, apartado 2) a entregarlos a petición de la policía judicial o a posibilitar su confiscación por otro medio. En caso necesario, esta obligación podrá imponerse también mediante el registro de personas o viviendas; en este caso se aplicarán *mutatis mutandis* los artículos 119 a 122.

2) En caso de que deba confiscarse información almacenada en soportes de datos, se deberá permitir el acceso a dicha información y, previa solicitud, facilitar un soporte de datos electrónicos en un formato que pueda utilizarse de forma general, o elaborar dicho soporte de datos. Asimismo, se permitirá realizar una copia de seguridad de la información almacenada en los soportes de datos.

3) A las personas que no hayan sido declaradas culpables de la comisión del acto de que se trate se les restituirá, previa solicitud, los correspondientes costes locales habituales que hayan surgido necesariamente por la separación de documentos u otros objetos comprobantes de otros documentos u objetos del mismo tipo o por la expedición de copias.

4) En cualquier caso, a la persona afectada por la confiscación deberá expedirse o notificarse enseguida, o a más tardar en el plazo de 24 horas, una confirmación de la confiscación y dicha persona deberá ser informada sobre su derecho a presentar un recurso (artículo 106). En la medida de lo posible, también deberá comunicarse a la víctima la existencia de una confiscación a fin de garantizar una resolución sobre las reclamaciones de derecho privado (artículo 110, apartado 1, punto 2).

Artículo 112. En caso de que la persona afectada por la confiscación o que esté presente durante la misma se oponga a la confiscación de notas escritas o de soportes de datos invocando una obligación de guardar secreto reconocida por la ley, se garantizará del modo adecuado que estas notas y soportes de datos no sean objeto de una inspección no autorizada, y se presentarán ante el órgano jurisdiccional, sin inspección previa. El órgano jurisdiccional examinará las notas y los soportes de datos y decidirá si, y en caso afirmativo en qué medida, debe seguir sometiéndolos a confiscación o devolverlos a la persona afectada. Toda objeción formulada al respecto tendrá efectos suspensivos.

Artículo 113. 1) La confiscación finalizará

1. cuando la policía judicial la suprima (apartado 2)
2. cuando el ministerio fiscal ordene su supresión (apartado 3)
- 3 cuando el órgano jurisdiccional ordene la incautación.

2) La policía judicial informará sin falta al ministerio fiscal sobre toda confiscación, a más tardar en el plazo de 14 días (artículo 100, apartado 2, punto 2), siempre que aquélla no la haya suprimido previamente, en virtud del artículo 110, apartado 3, debido a la ausencia o a la desaparición de los requisitos de que se trate. No obstante, este informe podrá unirse al informe siguiente, siempre que con ello no se vulneren intereses fundamentales del procedimiento o de las personas de que se trate y los objetos confiscados sean de escaso valor, no se encuentren en poder de nadie o su posesión esté prohibida de modo general (artículo 445a, apartado 1). En relación con el artículo 110, apartado 3, punto 5, la policía judicial deberá proceder conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 6 de la Ley relativa a la falsificación de mercancías, de 2004, Boletín Oficial I n.º 56/2004.

3) El ministerio fiscal solicitará sin demora la confiscación al órgano jurisdiccional o, cuando no se den o hayan desaparecido los requisitos correspondientes, ordenará la supresión de la confiscación.

Artículo 114. 1) Hasta la adopción de una resolución sobre la incautación (artículo 115, apartado 2), la policía judicial se encargará de proteger los objetos confiscados, y a continuación lo hará el ministerio fiscal.

2) Cuando ya no haya motivo para seguir protegiendo los objetos confiscados, estos deberán entregarse sin demora a la persona bajo cuyo poder fueron confiscados, a no ser que haya evidencia de que dicha persona no esté autorizada. En este caso, se entregarán a la persona autorizada o, cuando ésta no esté a la vista y no pueda identificarse sin realizar un esfuerzo desproporcionado, según el artículo 1425 del Código Civil General se depositarán judicialmente.

Artículo 115 de la LEC - Incautación

1) Se autorizará la incautación cuando se prevea que los objetos confiscados

1. serán necesarios como medio probatorio en el transcurso ulterior del proceso

2. sean objeto de reclamaciones de derecho privado (artículo 367), o

3. servirán para garantizar una resolución judicial sobre embargo de beneficios (artículo 20 del CP), incautación (artículo 20b del CP), decomiso (artículo 26 del CP) u otra disposición de carácter patrimonial prevista por la ley, cuya ejecución, en caso contrario, se vería en peligro o seriamente dificultada.

2) El órgano jurisdiccional, previa solicitud del ministerio fiscal, deberá pronunciarse sin demora sobre la incautación.

3) Se aplicará *mutatis mutandis* el artículo 110, apartado 4. Dado el caso, la incautación se limitará a las reproducciones y copias que allí se indican.

4) Por lo que se refiere a una incautación mediante exclusión de terceros y prohibición de cargo o enajenación (artículo 109, punto 2, letra b), se aplicarán *mutatis mutandis*, siempre que en esta ley no se indique lo contrario, las disposiciones de la orden de embargo mediante interdictos provisionales.

5) En la decisión mediante la cual se autorice una incautación para garantizar una resolución judicial sobre el embargo de beneficios (artículo 20 del CP) o la incautación (artículo 20b del CP) se fijará un importe que cubra el embargo de beneficios previsto o la incautación prevista.

6) A partir del momento en que no se den las condiciones para realizar la incautación o se haya abonado el importe fijado en el apartado 5, el ministerio fiscal, una vez que se haya presentado la acusación ante el órgano jurisdiccional, suprimirá la incautación.

III. Sobre el procedimiento que debe seguirse en el embargo de beneficios, la incautación y el decomiso

Artículo 443. 1) En la sentencia condenatoria deberá adoptarse una resolución sobre el embargo de beneficios, la incautación, el decomiso y otras disposiciones de carácter patrimonial (responsabilidad respecto de las sanciones pecuniarias y restitución de las pérdidas y del valor), siempre que en esta sección no se indique lo contrario.

2) Cuando los resultados del procedimiento penal no basten por sí mismos ni tras la obtención de pruebas que no demoren considerablemente la resolución en la cuestión de la culpabilidad y de la pena, para poder dictaminar de manera segura sobre las disposiciones de carácter patrimonial mencionadas en el apartado 1, la sentencia podrá quedar a salvo mediante la resolución de una decisión aparte (artículos 445 y 445a); fuera de este caso, ya no se autorizará una disposición semejante en razón de los bienes u objetos afectados.

3) La resolución sobre las disposiciones de carácter patrimonial será equiparable, salvo en el caso previsto en el artículo 445a, a la sentencia sobre la pena y podrá ser impugnada en favor o en contra del condenado o de la persona que participe en la responsabilidad (artículos 64 y 444).

Artículo 444. 1) La vista de la causa y el pronunciamiento de la sentencia podrán tener lugar sin la presencia de la persona que participe en la responsabilidad (artículo 64), cuando dicha persona haya sido citada de forma reglamentaria a la vista de la causa (artículo 221, apartado 2).

2) Cuando las personas que participen en la responsabilidad sólo hagan valer su derecho una vez que tenga fuerza legal la resolución sobre la incautación o el decomiso, dicha personas podrán optar por hacer valer sus reclamaciones con respecto al objeto de que se trate o a su precio de adquisición (artículo 408) en el plazo de 30 años a partir de la resolución que se haya dictado contra la Federación siguiendo la vía del derecho civil.

Artículo 444b. Siempre que se no se indique lo contrario, las disposiciones relativas a la incautaciones se aplicarán *mutatis mutandis* a la responsabilidad respecto de las sanciones pecuniarias, la restitución de las pérdidas y del valor y el embargo de beneficios.

Artículo 445. 1) En caso de que haya motivos suficientes para suponer que se dan las condiciones para efectuar el embargo de beneficios (artículo 20 del CP), la incautación (artículo 20b del CP) o el decomiso (artículo 26 del CP), sin que deba decidirse al respecto en un proceso penal o en un proceso organizado en uno de los establecimientos indicados en los artículos 21 a 23 del CP, el fiscal deberá solicitar de forma independiente la promulgación de semejante disposición de carácter patrimonial.

2) El órgano jurisdiccional que fuera competente respecto de la vista y del fallo motivados por el hecho que debe fundar la disposición en cuestión, o, si dicho órgano no tuviera esa competencia, la audiencia provincial en cuyo ámbito se encuentre el bien o el objeto de que se trate, deberá dictar sentencia en un proceso independiente, tras la vista oral pública, sobre la solicitud de embargo de beneficios o de incautación. El fallo en la audiencia provincial lo dictará un juez único. En caso de que un tribunal de escabinos o de jurados hubiera dictado sentencia sobre el hecho que debe fundar la disposición o dejar a salvo la resolución (artículo 443, apartado 2), será competente su presidente como juez único.

3) El juzgado municipal del lugar en que se hayan cometido los hechos, o, si dicho lugar no fuera conocido o se encontrara en el extranjero, el juzgado municipal en cuyo ámbito se encuentre el objeto de que se trate, deberá, por regla general, dictar sentencia (artículo 445a) en un proceso independiente, tras la vista oral pública, sobre la solicitud de decomiso. Las disposiciones sobre la vista de la causa en el proceso ante los tribunales municipales, así como el artículo 444, se aplicarán *mutatis mutandis*.

4) La sentencia podrá impugnarse recurriendo en la forma adecuada a los artículos 463 a 468 (artículo 489) en favor y en contra de la persona afectada. El artículo 444, apartado 1, última frase, se aplicará *mutatis mutandis*.

Artículo 445a. 1) El tribunal municipal podrá dictar una resolución en un proceso independiente, tras la audición del fiscal y de la persona que participe en la responsabilidad (artículo 444), sobre una solicitud de decomiso cuando el valor del objeto amenazado de decomiso no supere los 1000 euros o se trate de un objeto cuya posesión esté prohibida de forma general. Cuando el lugar de residencia de la persona que participe en la responsabilidad se encuentre en el extranjero o no pueda determinarse sin realizar trámites procesales especiales, podrá prescindirse de la audición en cuestión.

Artículo 446. Si las condiciones para que tenga lugar el proceso independiente no se dieran hasta el momento de la vista de la causa, la resolución podrá pronunciarse también en un juicio en el que el acusado sea absuelto o se deniegue la solicitud de internamiento.

Ley federal de 4 de diciembre de 1979 sobre la extradición y la asistencia judicial en materia penal (Ley de extradición y asistencia judicial – LEAJ)

Ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en materia penal

Artículo 64. 1) La ejecución o prosecución de la ejecución de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional extranjero y por la que se haya impuesto con fuerza legal una sanción pecuniaria o una pena privativa de libertad, una medida preventiva o una disposición de carácter patrimonial, se autorizará, a petición de otro Estado, si

1. la resolución del órgano jurisdiccional extranjero ha sido dictada en el transcurso de un proceso que se inspire en los principios contemplados en el artículo 6 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, Boletín Oficial n.º 210/1958,

2. la resolución ha sido dictada en razón de un acto que, según el derecho austriaco, es objeto de sanción judicial,

3. la resolución no ha sido dictada en razón de una de los actos delictivos contemplados en los artículos 14 y 15,

4. según el derecho austriaco, no se ha producido una prescripción de la ejecución,

5. la persona afectada por la resolución del órgano jurisdiccional extranjero no ha sido perseguida, condenada o absuelta con fuerza de ley en el territorio nacional en relación con el acto de que se trate, o ha dejado de ser perseguida.

2) La ejecución de la resolución dictada por un órgano jurisdiccional extranjero por la que se haya impuesto una pena privativa de libertad o una medida preventiva sólo se autorizará cuando el condenado sea nacional austriaco, tenga su domicilio o residencia en el territorio nacional y haya aceptado la ejecución nacional.

3) La ejecución de medidas preventivas sólo se autorizará en los casos en que el derecho austriaco prevea una medida del mismo tipo.

4) La ejecución de la resolución dictada por un órgano jurisdiccional extranjero por la que se adopten disposiciones de carácter patrimonial sólo se autorizará en la medida en que, según el derecho austriaco, se den las condiciones para imponer una sanción pecuniaria, un embargo de beneficios, una incautación o un decomiso y todavía no se haya promulgado ninguna disposición nacional equivalente.

5) Asimismo, la ejecución de la resolución dictada por un órgano jurisdiccional extranjero por la que se haya impuesto una sanción pecuniaria o un embargo de beneficios sólo se autorizará cuando quepa esperar la transferencia en el territorio nacional y se haya oído a la persona afectada, siempre que sea accesible.

6) Asimismo, la ejecución de la resolución dictada por un órgano jurisdiccional extranjero y por la que se haya impuesto con fuerza de ley una incautación o un decomiso sólo se autorizará cuando los objetos o bienes afectados por dicha resolución se encuentren en el territorio nacional y se haya oído a la persona afectada, siempre que ella sea accesible.

7) Las sanciones pecuniarias, los importes embargados, los bienes incautados y los objetos decomisados se adjudicarán a la Federación.

Resolución ejecutoria nacional

Artículo 65. 1) Cuando se asuma la ejecución de una resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional extranjero en materia penal, se determinarán según el derecho austriaco, teniendo en cuenta la medida impuesta en dicha resolución, la sanción, la medida preventiva o la disposición de carácter patrimonial que deban ejecutarse en el territorio nacional. Una incautación impuesta en virtud de una resolución judicial dictada en el extranjero podrá ejecutarse como incautación también en el territorio nacional cuando, según el derecho austriaco, se hubiera realizado un embargo de beneficios.

- 2) En caso de asumirse la ejecución, la persona afectada por la resolución no podrá verse más perjudicada que en el caso de que la ejecución se realizara en otro Estado.
- 3) Los artículos 38 y 66 del Código Penal se aplicarán *mutatis mutandis*.

Artículo 66. Las solicitudes de ejecución de resoluciones judiciales dictadas en el extranjero deberán ser cursadas por el Ministerio Federal de Justicia a la audiencia provincial competente (artículo 67, apartado 1). Cuando ya en el momento de recibirse la solicitud se evidencien circunstancias que hagan improcedente asumir la ejecución por uno de los motivos indicados en los artículos 2 y 3, apartado 1, o cuando la solicitud sea inadecuada para ser tramitada conforme a derecho, el Ministerio Federal de Justicia desestimarán de inmediato la solicitud en cuestión. El Ministerio Federal de Justicia podrá exigir en cualquier fase del proceso, por propia iniciativa o previa solicitud del tribunal de primera instancia de que se trate, al Estado solicitante de la asunción de la ejecución que complete la documentación correspondiente.

Artículo 67. 1) Para la ejecución y adaptación de la sanción, la medida preventiva o el embargo de beneficios de que se trate será competente la audiencia provincial en cuyo ámbito tenga su domicilio o residencia la persona afectada. Si en virtud de lo dispuesto no resultara competente una determinada audiencia provincial, la competencia incumbirá a la audiencia provincial para asuntos penales de Viena. Para la solicitud de ejecución de una resolución sobre la incautación o el decomiso será competente la audiencia provincial (artículo 31, apartado 5, de la LEC) en cuyo ámbito se encuentre el bien o el objeto de que se trate.

2) El Ministerio Federal de Justicia notificará al Estado solicitante por la vía prevista a tal efecto la decisión que se haya tomado sobre la solicitud de asumir la ejecución y le informará acerca de dicha ejecución.

3) Una vez asumida la ejecución de una sanción o de una medida preventiva, ya no podrá incoarse un proceso penal en razón del acto subyacente al juicio de que se trate.

4) En lo tocante a la ejecución, la libertad provisional y el derecho de gracia, se aplicará lo dispuesto en el derecho austriaco.

5) La ejecución finalizará en cualquier caso cuando expire la ejecutividad de la sanción o la medida preventiva según el derecho del Estado solicitante.
